

RESOLUCIÓN No. 127 de 2017

(11 de diciembre de 2017)

“Por medio de la cual se declara la Prescripción de la acción de cobro administrativo coactivo respecto de la obligación a cargo del señor ANDREI LEONARDO SALAMANCA VARGAS identificado con C.C. 1049611526 y se declara la terminación del proceso 2009-009”

La funcionaria ejecutora de la Regional Boyacá del ICBF, en uso de las facultades conferidas por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, el artículo 98 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el libro V título VIII del Estatuto Tributario, la Resolución No. 384 del 11 de febrero de 2008 emanada de la Dirección General del ICBF, la Resolución No. 2934 del 2009 y la Resolución No. 2278 de 11 de octubre de 2017 mediante la cual se designa como funcionario ejecutor de la Regional Boyacá a un servidor público y, de acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Que mediante oficio con radicado interno No. 002007 de 13 de febrero de 2009, el Juzgado Primero de Familia de Tunja remitió al ICBF Regional Boyacá, fotocopia auténtica, con constancia de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo de la sentencia proferida el día 13 de noviembre de 2008.

Que el Juzgado Primero de Familia de Tunja, mediante sentencia de fecha 13 de noviembre de 2008, ordenó al señor ANDREI LEONARDO SALAMANCA VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.611.526, reembolsar los gastos en que incurrió el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR al practicar la prueba de ADN ordenada en el proceso de investigación de paternidad No. 2007-471. (Folios 1-13)

Que la sentencia fue notificada por edicto el cual se fijó en la secretaría del Juzgado el día 20 de noviembre de 2008 por el término de 3 días. Así mismo, el edicto se desfijó el día 24 de noviembre de 2008, según constancia remitida por el Juzgado. Por tanto y, conforme al marco normativo aplicable, la sentencia quedo debidamente ejecutoriada el día **27 de noviembre de 2008**. (Folios 11-13)

Que reposa en el expediente certificado emanado de la Subdirección de restablecimiento de derechos del ICBF de fecha 09 de febrero de 2011 donde se hizo constar que el valor de la prueba de paternidad o maternidad ascendía a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000) M/CTE por concepto de capital. (Folios 14)

Que no reposa en el expediente cobros persuasivos contra el deudor.

Que previo cumplimiento de los respectivos formalismos, mediante auto de fecha 06 de junio de 2014 se abocó por competencia el conocimiento del proceso de cobro administrativo coactivo en contra del señor ANDREI LEONARDO SALAMANCA VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.611.526 por la suma CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000) M/CTE, más los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago total de la obligación. (Folio 15)



Que se libró mandamiento de pago contra el señor ANDREI LEONARDO SALAMANCA VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 1049611526 mediante Resolución No. 013 de fecha 06 de junio de 2014, por la suma CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000) M/CTE, por concepto de capital más los intereses moratorios liquidados en la tasa del 12% anual de conformidad con la normatividad vigente (Ley 68 de 1923 artículo 9). (Folio 16)

Que mediante oficio con radicado interno No. S-2014-057573-1500 de fecha 25 de junio de 2014, se realizó citación al señor ANDREI LEONARDO SALAMANCA VARGAS, en aras de notificarle personalmente el mandamiento de pago, del cual reposa constancia de devolución de la empresa de correo motivo "cerrado". (Folios 17-18)

Que el día 14 de noviembre de 2014 se realizó consulta en CIFIN, sin encontrar cuentas bancarias del deudor susceptibles de embargo. (Folio 19)

Que el día 14 de mayo de 2015 se envió oficio con radicado interno No. S-2015-178217-1500 en aras de realizar notificación por correo al señor ANDREI LEONARDO SALAMANCA VARGAS, del cual reposa constancia de devolución de la empresa de correo por motivo "no reside". (Folios 20-23).

Que mediante Auto No. 009 de fecha 24 de Julio de 2015, se ordenó una investigación de bienes a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto de Tránsito de Boyacá, Cámaras de Comercio y consulta en CIFIN y se libraron los respectivos oficios a las entidades referenciadas (Folios 24-31)

Que el día 07 de septiembre de 2015 se realizó notificación del mandamiento de pago por aviso en el Diario El Nuevo Siglo. (Folio 31)

Que el día 27 de mayo de 2016 se realizó consulta en CIFIN, sin encontrar cuentas bancarias del deudor susceptibles de embargo. (Folio 32)

Que mediante Auto No. 010 de fecha 17 de noviembre de 2016, se ordenó una investigación de bienes a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto de Tránsito de Boyacá, Cámaras de Comercio y consulta en CIFIN y se libraron los respectivos oficios a las entidades referenciadas (Folios 33-68)

Que el día 22 de noviembre de 2016 se realizó consulta en CIFIN sin encontrar cuentas bancarias del deudor susceptibles de embargo. (Folio 69)

CONSIDERANDO

Que la Ley 1066 de 2006 "*por la cual se dictan Normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones*" en su artículo 5, establece la facultad de cobro coactivo de las entidades públicas e indica que el procedimiento de cobro coactivo será el contemplado en el Estatuto Tributario.

Que el artículo 828 del Estatuto Tributario y el artículo 99 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establecen los títulos que prestan mérito ejecutivo a favor de la administración.

Que la prescripción constituye una de las formas de extinción de las obligaciones por el paso del tiempo sin que se haya logrado el pago de la acreencia. Y la Corte Constitucional en Sentencia C 895 de 2009 la ha definido en los siguientes términos: "*La prescripción extintiva o liberatoria es la institución jurídica por medio de la cual se pone fin a un derecho y a la correspondiente obligación, como consecuencia del paso del tiempo y de la pasividad de su titular en exigirlo por*



los cauces previstos en el ordenamiento, y halla sustento en los principios de seguridad jurídica, orden público y paz social.”

Que el Consejo de Estado¹ indicó: *“la acción de cobra de las obligaciones fiscales prescribe en cinco años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. De acuerdo con el artículo 818 ibídem, dicho lapso se interrumpe, entre otros eventos, por la notificación del mandamiento de pago, lo que en el caso de autos se cumplió el 30 de agosto de 2007 por conducta concluyente, según se concluyó en el segundo cargo analizado en esta providencia. Una vez interrumpida la prescripción, el término empieza a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago. En sí misma, la prescripción que se comenta es extintiva en cuanto pone fin al derecho y a la obligación que él involucra, sancionando la inercia de su titular en exigirlo dentro de plazos razonables, en procura de garantizar la seguridad jurídica, el orden público y la paz social, y sin transgredir los derechos al trabajo y a la seguridad social”.*

A su vez en sentencia de 02 de Julio de 2015² estableció: *“en relación con la prescripción de la acción de cobro, la Sala reitera que de la lectura de los artículos 817 y 818 del E. T. se desprende que la obligación de la administración no solo es iniciar la acción de cobra coactivo dentro de los cinco años siguientes a que la obligación se hizo exigible, sino que, una vez iniciada, debe culminarla en ese término, so pena de que los actos que expida después de expirado el término queden viciados por falta de competencia temporal, pues « ... detrás del término de prescripción de la acción de cobro coactivo hay poderosas razones de seguridad jurídica tanto para la administración como para los contribuyentes. Para la administración porque debe existir siempre un momento definitivo en el que se consoliden los actos administrativos que expide en el procedimiento de cobro coactivo. Y para los contribuyentes, porque la acción de cobro no puede extenderse indefinidamente en el tiempo» “.*

Que el Código Civil en el Título XIV y Capítulo III al regular el modo de extinguir las obligaciones, consagra en sus artículos 1625 y 2535 la figura de la prescripción, la cual se genera por un *lapso de tiempo* sin que se hayan realizado acciones. Y el artículo 2536 indica que la acción ejecutiva se prescribe por cinco años y ña ordinaria por diez.

Que según la Resolución 384 de 2008 *“por la cual se adopta el reglamento interno de recaudo de cartera”* concordante con la Resolución 2934 de 2009 *“por la cual se expide el Manual de Cobro Administrativo Coactivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”*, el proceso administrativo por jurisdicción coactiva se podrá dar por terminado y en consecuencia se archivará el expediente cuando se advierta que procede la prescripción de la obligación.

Que el Estatuto Tributario, en su artículo 817 determina que la acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de que se hicieron legalmente exigibles.

Que la Resolución 384 de 2008, en su artículo 58 establece la competencia que tiene el Funcionario Ejecutor para ordenar la prescripción de oficio de las obligaciones que se encuentren en etapa de cobro coactivo, concordante con el inciso del artículo 817 Estatuto Tributario Nacional reglamentado por el Decreto Nacional 2452 de 2015.

Que atendiendo a lo establecido en el artículo 818 ibídem y artículo 57 de la Resolución 384 de 2008, el término de prescripción se interrumpe, en los siguientes casos: *“1. Por la notificación del mandamiento de pago (...). A su vez, este artículo preceptúa que interrumpida la prescripción*

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ. Sentencia de 09 de diciembre de 2013, Rad. 00198 (18126)

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS. Sentencia de 02 de julio de 2015, Rad. 00243 (19500)



por la notificación del mandamiento de pago, **el término se contabiliza de nuevo a partir del día siguiente de su ocurrencia.**

Aplicados éstos derroteros en la especie objeto de estudio, se tiene que el término de la acción de cobro no fue interrumpido con la notificación del mandamiento de pago. Lo anterior, toda vez que la obligación se hizo exigible el día **27 de noviembre de 2008** y la notificación del mandamiento de pago fue realizada en debida forma por aviso en prensa hasta el día 07 de septiembre de 2015 (folio 31). Por tanto, a la fecha en la cual se notificó la Resolución No. 013 de 2014, ya había transcurrido más de cinco años desde la exigibilidad de la obligación objeto de ejecución, sin que se hubiera logrado un cobro efectivo total de la obligación.

Que de conformidad con memorando con radicado interno No. I-2017-131331-1500 de fecha 07 de diciembre de 2017, el Grupo Financiero de la Regional Boyacá certificó que el señor **ANDREI LEONARDO SALAMANCA VARGAS**, con corte a 04 de diciembre de 2017 adeuda la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000) M/CTE** por concepto de capital.

Que la Funcionaria Ejecutora determina que dentro del proceso *sub exámine* está demostrada la procedencia del saneamiento de cartera en las circunstancias mencionadas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la PRESCRIPCIÓN de la acción de cobro dentro del proceso de cobro coactivo adelantado en contra del señor **ANDREI LEONARDO SALAMANCA VARGAS** identificado con C.C. No. **1049611526**, por la obligación contenida en la Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2008 proferida por el Juzgado Primero de Familia de Tunja, que a la fecha asciende a la suma **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$435.000) M/CTE** por concepto de capital más los intereses moratorios que se hayan causado a la tasa del 12% anual de conformidad con la normatividad vigente y dejados de cancelar, de conformidad con lo motivado supra.

SEGUNDO: En consecuencia, DAR POR TERMINADO el proceso administrativo de cobro coactivo número 2009-009 que se adelanta en contra del señor **ANDREI LEONARDO SALAMANCA VARGAS** identificado con C.C. No. **1049611526**.

TERCERO: LEVANTAR las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso, para el efecto librense los oficios correspondientes.

CUARTO: NOTIFICAR al demandado de la decisión acogida en la presente resolución, haciéndole saber que en contra la misma no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto por el artículo 833-1 del Estatuto Tributario.

QUINTO: COMUNICAR la presente Resolución al Grupo Financiero de la Regional Boyacá para que proceda con la cancelación del registro contable correspondiente.


SEXTO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia.



SÉPTIMO: ARCHIVAR el expediente y háganse las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Tunja, 11 de diciembre de 2017



SANDRA MILENA BERNAL PINILLA
Funcionaria Ejecutora
ICBF Regional Boyacá

Aprobó: Sandra Milena Bernal P.
Revisó: Sandra Milena Bernal P.
Proyectó: Sandra Milena Bernal P.

